

Almunia asegura que hay expulsiones porque los centros aplican las normas

La consejera de Educación considera "una buena noticia" que existan estas sanciones y asegura que los colegios son seguros. La oposición cree que el plan de convivencia de la Administración es poco ambicioso.

P. CIRIA/ EFE. Zaragoza |

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, defendió ayer la seguridad de los centros educativos de la Comunidad Autónoma y aseguró que existen expedientes disciplinarios y expulsiones porque sus equipos directivos y los docentes saben aplicar las normas.

Almunia respondió, tras la firma de un convenio con la sociedad de la Expo 2008, a las declaraciones del PP respecto al plan de convivencia en las aulas puesto en marcha por el Gobierno de Aragón y el número de expedientes abiertos en los centros aragoneses con las que, según la consejera, el PP evidenció que "las cosas en nuestro sistema educativo se toman en serio" y que "cuando hay conflictos el centro educativo los soluciona".

Los populares indicaron que cerca de 24 alumnos zaragozanos fueron expulsados del colegio de forma temporal cada día durante el curso pasado. En esas fechas, los centros de la provincia aplicaron 4.134 de estas sanciones (437 más que el anterior y 1.289 más que en 2003-2004). Los casos se concentran, sobre todo en los Institutos de Secundaria. En concreto, el 73,8 % de los expulsados de esos centros eran alumnos de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Además, en el curso pasado se aplicaron un total de 503 de estas medidas correctivas, una media de 2,8 al día (hay que recordar que hay 175 jornadas lectivas cada curso). En 2003-2004 se contabilizaron un total de 479.

En opinión de Almunia, las cifras aportadas por la portavoz de Educación del PP en las Cortes autonómicas y por la secretaria ejecutiva de Política Social, Ana Pastor, "demuestran la seriedad con que se toman nuestros centros educativos la convivencia en las aulas".

Aunque comentó que su departamento todavía no dispone de los datos del curso 2005-2006, que elabora la Inspección Educativa en estos momentos, informó de que de acuerdo con las cifras del curso anterior "había descendido el número de sanciones interpuestas".

Precisó que cada vez hay más centros que registran expedientes, lo que consideró "una buena noticia", aunque insistió en que "hay centros educativos que abren muchos expedientes y otros que no han abierto nunca ninguno".

La consejera criticó, no obstante, las cifras aportadas por el PP y dijo que "es un tanto peligroso por la sensación que la ciudadanía pueda percibir".

Al Ejecutivo le "interesa mucho más comprobar cómo los centros educativos solucionan sus problemas", subrayó, y "la respuesta es buena, nuestros colegios son seguros, los docentes se toman su tarea muy en serio y cuando surge algún problema aplican una sanción".

Informes "peligrosos"

La lectura más negativa sobre las declaraciones del Partido Popular fue la referencia al Informe Cisneros, también "un tanto peligroso, porque no goza de buena reputación", ya que, recordó, es el documento "más vilipendiado" que hay en estas cuestiones. Ana Pastor aludió el lunes en Zaragoza a este documento en el que se recoge que un 90 % de los profesores, agregó Pastor, refieren actos de violencia en sus centros, un 60 % agresiones verbales habituales y uno de cada cinco dice que padece el síndrome del "profesor quemado" (burnout). Pastor destacó también un informe del sindicato de profesores que agrupa al cuerpo de catedráticos de instituto en el que han participado 500 docentes, que indican en un 99,5 % que son necesarias medidas que garanticen un clima de respeto.

A juicio de la consejera, la exposición que hizo Ana Pastor responde al objetivo del PP de "demostrar que esta sociedad y los centros educativos no son seguros", cuando esa "no es la esperanza que tenemos que tener ni la realidad que estamos viviendo los aragoneses" porque "tenemos buena seguridad en los centros educativos", insistió Almunia.

En la misma línea se expresó su socia de Gobierno María Herrero (PAR), que consideró que la convivencia en las aulas es un tema en el que "hay que ser muy cautelosos y no dar datos para alarmar a la sociedad". La diputada aragonesa explicó que este tema requiere una solución compleja y las "simplificaciones no ayudan". Herrero apuntó que hay que prevenir y erradicar los casos existentes y "dotar de recursos y apoyo a los docentes". Matizó, además, que lo que ocurre en los colegios de la Comunidad "es un reflejo de lo que se vive en la sociedad".

"Política de escaparate"

La diputada de Chunta, Nieves Ibeas, se mostró más dura con el plan de convivencia que lanzó el Gobierno de Aragón, que consideró "es sólo una política de escaparate". Ibeas aseguró que es un programa que no satisface las expectativas, "sin desarrollo y sin seguimiento".

La diputada consideró que lo esencial es resolver problemas que pueden favorecer un clima inadecuado en los colegios. Entre ellos, destacó que existe una "mala distribución" de la diversidad en los centros escolares. Pidió, además, que se desarrolle el decreto de orientación del profesorado cuya elaboración se aprobó en las Cortes de Aragón a propuesta de Chunta hace ya tres años.

El portavoz de Izquierda Unida en las Cortes, Adolfo Barrena, alertó del peligro que conlleva "magnificar" los datos y apuntó que "esa estrategia no beneficia a nadie". Éste apuntó que la escuela aragonesa no es especialmente conflictiva respecto a otras Comunidades, aunque "esto no quiere decir que no existan problemas y que no haya que actuar". Como solución para acabar con la violencia en las aulas, Barrena propuso que se adopten medidas que ayuden a prevenir conflictos. "La bajada de las ratios en las aulas (número de alumnos por profesor) y destinar más recursos a la atención a la diversidad y multiculturalidad resultan actuaciones esenciales", argumentó el diputado de IU.